

Estrictamente Personal



Raymundo Riva Palacio

■ **La farsa de las narcolistas**

Las autoridades federales están tendiendo cortinas de humo tras la caída del narcojefe Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca. Dicen que encontraron varias listas de funcionarios públicos y policías que les brindaban protección institucional en el departamento donde fue abatido. Los medios lo visten de hallazgo, pero son más dudas que certidumbre lo que producen, porque desde 2003 se ha venido acumulando documentación de la corrupción de políticos, policías, empresarios y religiosos vinculados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Si lo que aseguran ahora las autoridades es cierto, tendrán que añadir nuevos nombres a la lista o será otra farsa.

La primera referencia de la red de protección institucional a los Beltrán Leyva se da a partir de un documento del Cisen difundido originalmente por el semanario Zeta de Tijuana el 17 de febrero de 2006, y reproducido dos años después como parte de un proyecto trunco llamado "Impunidad", donde varios medios hicieron un esfuerzo para encontrar a los responsables del crimen del reportero del periódico de Hermosillo *El Imparcial*, Alfredo Jiménez Mota, asesinado presuntamente por sus sicarios.

El documento sostiene que desde 2003 operaban los Beltrán Leyva en Sonora bajo la protección de las autoridades. El personaje mencionado más prominente era el entonces presidente municipal de Cajeme, Ricardo Bours, hermano del exgobernador de Sonora Eduardo Bours, apoyado por Roberto Tapia, quien era el director de la Policía Judicial del estado, y Abel Murrieta, a la sazón subprocurador de Investigaciones. Pero ni la información del Cisen ni la posterior revelación periodística dieron pie a ninguna acción posterior.

Más aún, sucedieron cosas que se podrán caracterizar, cuando menos, de extrañas. A principios de febrero de 2005, fuentes de la Presidencia de la República revelaron al columnista Francisco Garfias que la PGR investigaba a Nahúm Acosta, coordinador de

giras presidenciales, por su presunta relación con Héctor Beltrán Leyva. Acosta, quien llegó a Los Pinos por invitación de Manuel Espino, exlíder nacional del PAN, formaba parte de la pesquisa llamada Operación Tritón.

Las autoridades llegaron a él a través de las interceptaciones telefónicas a Renato Tostado Félix, un sicario al servicio de José Esparragosa *El Azul*, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, quien se comunicaba con Guillermo Francisco Ocaña, un empresario artístico detenido en diciembre de 2005 junto con colombianos y venezolanos por narcotráfico, y acusado por el gobierno español de lavado de dinero.

El celular de Ocaña tenía llamadas al celular de Acosta, por lo que intervinieron su teléfono, y grabaron conversaciones con Héctor Beltrán Leyva. La publicación provocó que la PGR apresurara la acusación y presentara a Acosta ante el juez, quien lo liberó al mes siguiente por falta de pruebas. El entonces jefe de la

SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, comentó que al difundirse la investigación, la sabotearon. Tampoco hubo consecuencias contra los funcionarios en Los Pinos.

La investigación contra los Beltrán Leyva continuó, y en mayo de 2007 llegaron a la casa donde vivía Arturo en el Pedregal de San Ángel. Un pitazo desde la SIEDO permitió que escapara. En la casa encontraron documentación que llevó a la captura de Sandra Ávila, *La Reina del Pacífico*, encargada de las relaciones públicas del cártel de Sinaloa, y de Juan Diego Espinosa Ramírez, *El Ti-*

gre, segundo en el mando del cártel del Valle de



| | | |
|---------------------|---------------------|--------------|
| Fecha 23.12.2009 | Sección Política | Página 22 |
|---------------------|---------------------|--------------|

Colombia, en septiembre de 2007.

Los documentos incluían nóminas de jefes policíacos, entre ellos Ricardo McGregor, que era el jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial del Distrito Federal, quien presentó su renuncia al cargo en enero de 2008 sin ser procesado, y una relación de bandas gruperas que recibían dinero. De ahí sacaron también una pista que los llevó a una casa en el fraccionamiento de Las Quintas, en Cuernavaca, donde presumían se había refugiado Arturo Beltrán Leyva.

Después de tener la casa bajo observación, la Policía Federal Preventiva intervino la residencia, donde encontraron identificaciones con los sellos de la misma PFP, de la judicial del Distrito Federal, y otros nombres de jefes policíacos que protegían al cártel, lo que derivó en la sacudida que se dio en Morelos en mayo pasado, cuando el gobernador Marco Antonio Adame destituyó a su secretario de Seguridad Pública y a su procurador de Justicia, en el contexto de operaciones contra los hermanos Beltrán Leyva en la entidad.

La casa intervenida arrojó detalles adicionales, como los nombres de un hotel, una iglesia y un seminario católicos que daban resguardo a los sicarios de Beltrán Leyva. Las autoridades federales tienen los nombres del párroco que daba la protección, pero no ha pasado nada.

Tampoco con la información que acumuló el servicio de contrainteligencia de Beltrán Leyva, que integraban 300 personas, con los nombres de sus vínculos en el

aeropuerto de Morelos y las policías estatal y municipal.

Esa vasta red de protección en varias entidades les permitió asesinar en mayo de 2008 a Edgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal y a Roberto Velasco, director de Crimen Organizado de la misma dependencia. La documentación que encontraron en la investigación del crimen de Millán mostró que los dos siguientes en la lista de la muerte eran Gerardo Garay, en ese momento responsable de la División Antidrogas, y Luis Cárdenas, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal. Previamente, fracasó el asesinato de Vasconcelos, y no se concretó el atentado contra un alto mando militar no identificado que planeaban cien sicarios.

En todas estas acciones, hubo policías involucrados; algunos fueron detenidos inmediatamente y otros vivieron meses en libertad antes de ser aprehendidos. Otros siguen libres, por razones que se desconocen. Tras la muerte de Beltrán Leyva, vuelven a decir las autoridades que hay listas de jefes policíacos y políticos vinculados. Es una variación sobre el mismo tema. Hasta ahora, la impunidad ha sido la constante, avasallando la aplicación de la justicia. ☒

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
www.twitter.com/rivapa

En todas estas acciones, hubo policías involucrados; algunos fueron detenidos inmediatamente y otros vivieron meses en libertad antes de ser aprehendidos